

Las dificultades reales para avanzar hacia un modelo energético alternativo: El caso de la energía eólica en las comarcas de Tarragona

Miguel Muñiz^[1]

A medida que se han ido conociendo los impactos que provoca el actual modelo energético, la percepción de que hay que cambiar la manera en que las sociedades ricas y «desarrolladas» producimos y consumimos energía se ha convertido en un tópico. Encontrar hoy por hoy una persona mínimamente informada que no acepte que es necesaria una transición hacia un nuevo modelo energético comienza a resultar realmente difícil, excepto si nos movemos fuera del sector técnico y empresarial más fundamentalista vinculado a los combustibles fósiles y a las nucleares. Esta apreciación mayoritaria sobre la necesidad de cambio se complementa con un consenso sobre la bondad intrínseca de las energías renovables.^[2]

Pero el discurso cambia radicalmente cuando, del apoyo genérico a dichas energías, se pasa a defender propuestas concretas para su aprovechamiento; en numerosas ocasiones el/la interlocutor/a (especialmente si es una persona vinculada a la administración o al mundo empresarial) pasa a desgranar una interminable re-tahíla de dificultades y problemas que convierten el cambio de modelo en una tarea casi imposible, que más vale dejar para un «futuro» indeterminado: las energías renovables son caras, irregulares, poco fiables, poco competitivas, insuficientes para cubrir una demanda que parece insaciable y, el colmo de los males, provocan múltiples impactos «paisajísticos» y visuales: categoría reciente que se aplica con poco rigor, y de manera bastante subjetiva. Es entonces cuando se descubre que no hay una voluntad real de plantearse una alternativa energética acorde con la gravedad de los impactos que se detectan, y que el tan cacareado apoyo a las energías renovables se limita en la mayoría de los casos a proyectos de demostración, o a iniciativas para reducir el coste de la factura energética.^[3]

Ciertamente, las energías renovables tienen la virtud de convertir los impactos globales en locales, de permitirnos comprobar en nuestro entorno más inmediato el precio que debemos pagar por el consumo energético. Resulta que, además, de todas las renovables, la energía eólica representa hoy por hoy la manifestación más extrema de esa constatación; y ello por dos motivos: ha llegado a un punto de desarrollo técnico en que compite económicamente con las energías sucias (a pesar de hallarse estas fuertemente subvencionadas) lo que la hace objeto general de inversión financiera y, además, su ámbito geográfico para generación a la red es bastante restringido.

Porque resulta que para que la energía eólica sea eficaz ha de haber viento, y para que contribuya realmente a cambiar el modelo energético, y a retrasar el impacto de catástrofes como el cambio climático, la primera condición es que debe funcionar al máximo rendimiento durante el mayor número de horas al año, lo que significa que los parques eólicos han de estar situados en zonas de vientos constantes, de elevada velocidad media anual.

Los datos disponibles sobre el potencial existente en Cataluña muestran que esta condición no se da en cualquier sitio: tan sólo en un 9% del territorio se dan velocidades

medias anuales superiores a 5 metros por segundo (lo que supone un funcionamiento aproximado de 4.400 horas anuales), y la mayoría de este territorio se concentra en las comarcas del sur de Tarragona y en las de la zona costera anterior a los Pirineos: dos áreas poco pobladas y poco frecuentadas, con un relieve accidentado, un buen nivel de riqueza natural y elevada biodiversidad: lo que indica que, de entrada, nos encontramos ante un conflicto potencial.

Para entender las implicaciones de este conflicto en el caso que nos ocupa hay que tener en cuenta tres factores: que Cataluña es una de las comunidades del Estado con un consumo eléctrico más elevado y con un mayor índice de nuclearización (entre un 60 y un 70% proviene de tres centrales nucleares ubicadas precisamente en Tarragona), lo que indica la urgencia de impulsar cuanto antes una nueva cultura de la energía;^[4] que entre 1999 y 2004 se produce la coincidencia de dos grandes proyectos conflictivos en las comarcas del sur de Tarragona (un proyecto de central térmica de ciclo combinado de 1600 Megavatios de potencia en Mora la Nova y el trasvase del Ebro incluido en el Plan Hidrológico Nacional, PHN), todo ello coincidiendo con un alud desordenado de peticiones de construcción de parques eólicos y, especialmente, la actitud displicente ante el tema energético de un gobierno de derecha nacionalista, enquistado en el poder durante 20 años de gestión ininterrumpida, y con fuertes complicidades políticas y económicas con el «lobby» nuclear.

Es esta actitud la que permite comprender que se acumulasen en tramitación 113 proyectos de parques eólicos, la mayoría de ellos orientados hacia las comarcas de Tarragona, sin que se manifestase el más mínimo interés del gobierno de Cataluña por ordenar el sector, y por diferenciar entre los que responden a una propuesta empresarial solvente de los que solo persiguen intereses especulativos. A diferencia de gobiernos autonómicos como los de Aragón y Navarra, que han abordado el aprovechamiento de sus recursos eólicos de manera activa, el gobierno de Convergencia i Unió (Ciu) fue oscilando entre la indiferencia, en una caricatura del principio neoliberal aplicado a toda la generación eléctrica, y el uso clientelar de determinados proyectos.^[5] se trata de una actitud coherente con las repetidas manifestaciones de miembros de dicho gobierno a favor de los combustibles fósiles y la energía nuclear, pero que abona el terreno para un tratamiento irracional del tema.

Y es que la contradicción, ya apuntada, entre apoyo genérico a la energía eólica y la presentación de objeciones cuando se entra en propuestas concretas de desarrollo también se extiende a quienes enfocan la ecología desde planteamientos estrictamente conservacionistas o naturalistas. Eludiendo abordar el desarrollo eólico desde un análisis riguroso de la realidad energética, evitando distinguir entre proyectos con criterios de aprovechamiento energético y protección de la biodiversidad y proyectos inadmisibles, y ahorrándose el esfuerzo para diferenciar entre impactos que se pueden corregir e impactos que obligan a descartar proyectos concretos, la respuesta primaria del conservacionismo consistió en integrarlos todos bajo la etiqueta genérica de «agresiones al territorio» (junto al PHN, la central térmica, los campos de golf, las incineradoras, y cualquier otra infraestructura), y comenzar a realizar mapas de zonas que habían de ser excluidas del aprovechamiento eólico por motivos que iban desde la protección de la avifauna a la del patrimonio cultural y artístico, pasando por el impacto visual y una supuesta amenaza al modelo de desarrollo socioeconómico que se consideraba adecuado para las áreas rurales; y sin considerar en dichos mapas la disponibilidad real de viento en los territorios delimitados.

Y así, en un ambiente de crispación social, de protestas en las que se formaron plataformas de oposición al transvase del Ebro o la central térmica de Mora la Nova, también fueron creándose plataformas para oponerse a cualquier proyecto eólico con independencia de su racionalidad, solvencia y necesidad.^[6]

Más allá de los factores generales apuntados hay otros más profundos que permiten entender este tipo de respuesta social ante los proyectos de parques eólicos. Un agravio comparativo que se traduce en una cierta concepción de las comarcas del sur de Tarragona (que actualmente gozan de un buen nivel de bienestar) como de una zona expoliada por la metrópoli de Barcelona (allí se ubican las tres nucleares, una petroquímica y diversas empresas de gran impacto ambiental) lo que se reafirma con la ocupación de las montañas («lo último que nos queda», en palabras de algún portavoz de la oposición a los parques) para producir una electricidad que consumen fuera; así como una falsa percepción del ámbito rural como natural en él mismo por oposición al ámbito urbano dominante y, como tal, sujeto a protección por principio.

Por todo ello, al margen de la consideración que compartimos todos los grupos ecologistas de que determinadas zonas deben gozar de una protección integral para proteger su biodiversidad (lo que excluye su aprovechamiento eólico por muy buenas condiciones de viento que tengan), esta percepción, que podemos calificar como de conservacionismo radical, tiende a ignorar tanto el efecto de los impactos globales del modelo energético como el impacto del aprovechamiento agrícola extensivo de las montañas,^[7] y tiende a confundir protección con impedir la actuación humana sobre el territorio; con lo que el único modelo de «desarrollo» socioeconómico que se deja a dichas zonas (donde la agricultura, la ganadería y la silvicultura están en constante regresión) es, aparte de la industria vinícola, la promoción de un turismo que, atraído por los valores naturales, se desplace desde las ciudades regularmente,^[8] lo que consolida el ciclo de despoblación rural y, si finalmente tiene éxito, agrava los consabidos impactos ambientales por el desplazamiento semanal de los visitantes en vehículos de motor.

El resultado de todos estos factores es que en Cataluña, entre 1995 y 2004, se ha dado una situación de moratoria de proyectos eólicos «de facto», lo que ha permitido llegar al año 2005 con la increíble cifra de 80 Megavatios eólicos en funcionamiento, situación que puede evolucionar a raíz de los cambios que se han producido en el último año.

Así, la retirada del proyecto de central térmica de Mora la Nova, entre otras causas por la quiebra de ENRON, la empresa promotora; la retirada del PHN como consecuencia del cambio de gobierno estatal, y el cambio político en la Generalitat ha permitido introducir un cierto nivel de racionalidad en el debate eólico en Tarragona: se mantiene una amplia zona de montañas como área de exclusión de proyectos eólicos (un 33% de las comarcas del Ebro y un 28% del total de Tarragona), resultado de la respuesta tardía del gobierno de CIU a las peticiones de ordenación del sector, que, en principio, hay consenso en mantener y, paralelamente, se ha comenzado a introducir una valoración, más serena y ajustada a la realidad, del papel positivo que en la economía local puede significar un parque eólico; asimismo se ha entrado en una etapa en que se da una evaluación más realista y detallada de los impactos que puede provocar su construcción y funcionamiento.

Toda esta dinámica se ha concretado en la presentación en Tarragona, el pasado 14 de septiembre, de un «Manifest pel desenvolupament de l'energia eólica» (Manifiesto para el desarrollo de la energía eólica), promovido por la Asociación de Productores de Energías Renovables y diversas entidades, que se limita a recordar hechos evidentes, y que ha sido suscrito hasta el momento por 3 Consells comarcals de Tarragona, 28 ayuntamientos y 15 asociaciones diversas, sindicatos, grupos ecologistas, etc.;^[9] así como en la creación de una asociación que coordina la defensa local de algunos proyectos: la Acció Ve'inal per l'Energia Eólica.

Porque, paradójicamente, resulta que la energía eólica no es sino el aprovechamiento de un recurso local renovable y duradero en el tiempo que permite obtener beneficios, frenar la dinámica de despoblación y crear un tejido económico y social estable. Se trata, además, de una actividad compatible con el uso del territorio para otros aprovechamientos, lo que la convierte, en los municipios que tienen la suerte de poseer el recurso, en un factor importante para avanzar hacia un sistema de vida rural sostenible y de calidad que combine el bienestar y el respeto a la biodiversidad.

[1]Portavoz en temas de energía de Ecologistes en Acció de Catalunya.

[2]Es necesario hacer constar que por energías renovables se entiende las incluidas en el catálogo redactado por la Unión Europea: solar, eólica, minihidráulica, geotérmica, biomasa, marina, metanización de restos orgánicos y biocombustibles.

[3]Ejemplos de lo anterior son los casos de la propuesta, auspiciada por el Ayuntamiento de Barcelona, para construir un parque eólico en el puerto de la ciudad (en el que se sabe que no hay prácticamente viento) por su valor demostrativo, al tiempo que se elude entrar en la evaluación de los recursos eólicos del área metropolitana; o de la también propuesta de los grupos conservacionistas más radicales para aumentar la prima a la energía eólica para que los promotores de parques se puedan instalar en zonas con escaso viento sin que peligren sus inversiones, propuesta que, paradójicamente, implica llenar determinados paisajes de aerogeneradores sin que estos contribuyan a frenar los impactos globales que afectan a los ecosistemas que son su objeto de preocupación.

[4]Se denomina nueva cultura de la energía al impulso simultáneo de medidas de ahorro, eficiencia y desarrollo de las energías renovables.

[5]Se han aportado abundantes documentos que prueban la existencia de una voluntad política por parte de personas del gobierno de Convergència i Unió de impulsar determinados proyectos de parques relacionados con su «entorno» empresarial e incluso familiar.

[6]Resulta significativo que en el inmenso cúmulo de mensajes que han circulado por internet enviados durante cinco años desde el GEPEC (Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes del Camp), la principal entidad dinamizadora de la oposición a los parques, y las diversas plataformas, tan sólo se hayan difundido informaciones negativas sobre la energía eólica (errores, deficiencias, limitaciones, etc.) o denuncias de impactos reales o supuestos, y ni uno solo aportando información positiva. Todo ello a pesar de que tanto el GEPEC como las plataformas manifiestan ser favorables a la energía eólica.

[7]Al tiempo que entre 1999 y el 2003, se detallaban mapas de zonas de exclusión del aprovechamiento eólico, se «hacía la vista gorda» ante la deforestación y los aterrazamientos realizados por la industria vinícola en las propias zonas que se decía proteger. Así, mientras una relación detallada de proyectos de parques que habían de ser bloqueados o descartados se hacía llegar a todos los grupos políticos del Parlament, se respondía a quien señalaba la incoherencia de ignorar el impacto de la deforestación indicando que se procedería a la redacción de una «Carta del Paisaje», sin

exigir a la industria vinícola la paralización de los desmontes, y sin que en el momento de escribir este texto, enero de 2005, la supuesta «Carta» haya tenido concreción alguna.

[8] Resulta ilustrativo que, en bastantes casos, algunas plataformas de oposición a proyectos eólicos contaran con la participación activa de veraneantes o residentes de fines de semana que veían amenazado su disfrute de la «naturaleza» por el impacto visual de los aerogeneradores.

[9] Greenpeace, el ICAEN (Institut Català d'Energia), los Consells Comarcals de l'Alt Camp, de Les Garrigues i de la Terra Alta, 28 ayuntamientos de diversos municipios de Cataluña (de las comarcas d'Anoia, Alt Camp, Alt Empordà, Baix Camp, Baix Ebre, Bages, Conca de Barberà, Les Garrigues, Priorat, Ribera d'Ebre, El Segrià i Terra Alta), la Acció Vernal per l'Energia Eòlica, la ASGECO (Associació General de Consumidors), la OCUC (Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya), la Associació de Ve'ins L'Albada (Tarragona) y Entesa Catalana per una Energia Neta i Renovable (al igual que las asociaciones que la forman: Associació Una sola Terra; Eurosolar - Associació Europea per les Energies Renovables [sección española]; Fundació Mare Terra Mediterrània; Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear; Alternativa Verda; Dia de la Terra - Catalunya; Mediterrània - Centre d'Iniciatives Ecològiques; World Information Service on Energy - Nuclear Informations Resource Service; Centre d'Estudis Naturistes y Centre de Desenvolupament Territorial).